

# La iniciativa por la calidad de la enseñanza pide "unidad" para exigir al Ejecutivo regional una política educativa "contraria" a la actual

jueves, 21 de octubre de 2010

*Ante los recortes y la "mala gestión" del Gobierno en esta materia, se convoca para el próximo jueves, día 28 de octubre, a las 18:00 horas, una manifestación que partirá desde la plaza Weyler.*

La Iniciativa por la Defensa de la Enseñanza Pública de Canarias nace con el objetivo de exigir al Gobierno regional que ponga a la educación "como prioridad", para lo que le pide que tome decisiones presupuestarias "justo en la línea contraria en la que viene actuando". Para que sus voces unidas lleguen al Ejecutivo, convocan para el próximo jueves, día 28 de octubre, a las 18:00 horas, una manifestación en defensa de la enseñanza pública canaria, que partirá desde la capitalina plaza de Weyler y que espera contar con numerosos representantes de diversos colectivos sociales y educativos que ya han confirmado su asistencia.



Esta iniciativa surge, según la representante de la Asociación de Madres y padres (AMPA) de San Benito, Luisa Tamayo, en respuesta al anuncio de recortes de más de 130 millones de euros en las cuentas públicas de 2011, lo que implica que "se continúe con la reducción constante de los presupuestos educativos de la última década". Para ella, el inicio del curso ya ha dejado patente la "gran cantidad de movimientos que han surgido diciendo 'basta ya' a los recortes" que, en su opinión, no son fruto de la crisis, sino directamente de "medidas en contra de la calidad educativa".

La representante del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STEC) de Intersindical Canaria, María Bolaños, hizo un llamamiento al profesorado para que participe en la manifestación porque "la gota ha colmado el vaso". Calificó los recortes de "salvajes" y recordó el derecho que tiene la población a recibir una educación de calidad.

"No sobran recursos y falta inversión educativa", reiteró la representante de STEC, quien pidió el esfuerzo de todos a favor de la educación, "a pesar de que, a su juicio, la Consejería de Educación "está haciendo dejación de sus responsabilidades".

Esta petición de unión ha sido ya respondida por numerosas organizaciones sociales, colectivos y personas que respaldan la Iniciativa por la Defensa de la Enseñanza Pública de Canarias, quienes reiteran la importancia de afirmar que apoyarse mutuamente para "alcanzar todos los objetivos que inspiran una educación y enseñanza pública de calidad". De hecho, a día de hoy, esta iniciativa cuenta ya con adhesiones de asociaciones de madres y padres de alumnos, asambleas, claustros, consejos escolares y de varios sindicatos con representación en la enseñanza pública. Al mismo tiempo, se pretende incorporar a las acciones de denuncia a personas que de forma individual quieran manifestar su malestar con la situación actual en la que se encuentra la enseñanza y que trabajan día a día por la calidad

de la educación pública y de la cultura.

El motivo de esta movilización se justifica, según sus promotores, por "el caótico comienzo de curso", en el que las protestas de las asociaciones de madres y padres, los claustros, los consejos escolares y los consejos municipales de Educación han ido en aumento por cuestiones como, según denuncian, el retraso en los nombramientos del profesorado, las plantillas incompletas, la carencia de sustituciones, la falta de presupuesto para actividades extraescolares y para el servicio de comedor, así como el número insuficiente de plazas en Formación Profesional y Educación Secundaria.

Recuerdan que la educación pública es un servicio "esencial en las sociedades democráticas" porque "favorece la igualdad de oportunidades, aumenta la cohesión social y consolida el estado del bienestar". De hecho, consideran que la aportación que "ha hecho y hace, la escuela pública, para el progreso de Canarias, es impagable e insustituible".

Sin embargo, los "déficits formativos históricos" que ha padecido Canarias, además de los indicadores actuales de abandono y fracaso en las titulaciones obligatorias básicas y la formación profesional, "imprescindibles para la recolocación de las personas paradas o para el mantenimiento del empleo", exigen, en su opinión, que se lleve a cabo un esfuerzo "preferente" en las políticas de formación.